

PROCESOS CONCURSALES: AUSTRIA Y GRECIA*.

*María Marcos González Lecuona.
Prof. Titular Derecho Procesal. Universidad de Alcalá.*

I. PROCESOS CONCURSALES: AUSTRIA**.

DICCIONARIO

Masseverwalter: administrador de la masa
Ausgleichsverwalter: administrador del arreglo
Konkurs: concurso
Ausgleich: arreglo
Zwangsausgleich: convenio forzoso
Zahlungsplan: plan de pagos
Schuldenregulierungsverfahren: proceso de regulación de deudas
Abschöpfungsverfahren: proceso de gravámen
Reorganisationsverfahren: proceso de reorganización

1. FUENTES LEGISLATIVAS

Sitio web: <http://www.ris.bka.gv.at>

Konkursordnung, 1.1.1915 (KO) = Ordenamiento Concursal
Ausgleichsordnung, 1.1.1915 (AO) = Ordenamiento del Arreglo
Insolvenzrechtseinführungsgesetz, 1.10.1997 (IEG)= Ley de Introducción del Derecho de Insolvencia
Unternehmensreorganisationsgesetz, 1.10.1997 (URG) = Ley de Reorganización de Empresas

2. BIBLIOGRAFÍA

FINK, H. Orac Rechtsskripten Zivilverfahrensrecht: Insolvenzrecht, edición Orac, Vienna, 1997.
JAHN, U. Insolvenzen in Europa, Recht und Praxis, 3ª edición, Bonn, 1998, pp.259-276.

* Este trabajo constituye la contribución de la autora, en versión castellana, a la obra *Il fallimento in Europa* de P. PAJARDI, reeditado por CEDAM bajo la dirección de S. Bonfatti.

** Colaboración de Nicolas Reischer, becario ERASMUS Univ. de Alcalá-Vienna.

3. PROCESOS JUDICIALES DE CARÁCTER PREVENTIVO

3.1. EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN

3.1.1. Generalidades

El ordenamiento jurídico austriaco ha incorporado recientemente al Derecho Concursal el proceso de reorganización y con este cauce procesal ha introducido un instrumento preventivo de la situación de insolvencia de una empresa (URG). La solución jurídica es muy interesante aunque todavía apenas ha sido utilizada en la práctica.

El legislador ha establecido reglas, en la regulación de este proceso, que puedan favorecer su éxito jurídico y atraer el interés de los empresarios hacia este modo de prevenir la insolvencia: entre éstas, destacan, la restricción de impugnaciones de las medidas adoptadas, con el consentimiento del Supervisor, durante el proceso de reorganización, en el supuesto de concurso consecutivo a la reorganización; la ampliación del plazo para recurrir frente a las decisiones abusivas adoptadas en el proceso de reorganización hasta comprender el período de tiempo que duró el mismo y, también la inaplicación de las reglas de reembolso de capital propio para favorecer la participación de los socios en la reorganización de la empresa.

3.1.2. Presupuesto subjetivo

Legitimación pasiva: al proceso de reorganización sólo pueden acceder las empresas, con la excepción de las Entidades de Crédito, Entidades Aseguradoras y Cajas de Pensiones.

Legitimación activa: únicamente el propio empresario o los órganos de representación de la empresa están legitimados para solicitar la apertura de este proceso. Se establecen distintos supuestos de responsabilidad personal de los órganos de representación de la empresa con el fin de ejercer cierta presión sobre éstos encaminada a la pronta solicitud del inicio del proceso.

3.1.3. Presupuesto objetivo

La situación jurídico-económica que admite, según el legislador (URG), la apertura del proceso preventivo exige la concurrencia en el sujeto pasivo de un doble aspecto consistente, por un lado, en que el capital propio de la empresa no exceda del 8% del total de los fondos disponibles y, por otro, que la previsión de pago de las deudas de la empresa se sitúe por encima de los quince años. Además es imprescindible que la empresa no esté en situación de insolvencia.

3.1.4. Diligencias previas

El solicitante debe acreditar la concurrencia de los presupuestos legales condicionantes del inicio del proceso y con ello la conveniencia de someterse a un plan de reorganización. El Juez examinará los elementos de juicio aportados y admitirá la petición si concurren los presupuestos legales y comprueba que no hay insolvencia manifiesta.

La petición de apertura del proceso de reorganización irá acompañada del respectivo plan de reorganización en el que constarán preceptivamente (URG): las razones que justifican la reorganización; las medidas que se proponen para superar la situación de crisis incluída, en su caso, la solicitud de un crédito; la aceptación por los acreedores de la suspensión del pago de sus créditos; las consecuencias que las medidas previstas provocarán en la situación laboral de los empleados; el consentimiento de todas las personas afectadas por el plan y, finalmente, el plazo previsto para su ejecución.

El legislador (URG) establece que, si es posible, el plazo en el que se realice el plan de reorganización no debe superar los dos años.

Si el solicitante no presenta en el Juzgado, junto con la petición de inicio del proceso, el plan de reorganización, deberá hacerlo en el plazo máximo de sesenta días.

La empresa deberá adelantar los gastos relativos a las funciones del Supervisor.

3.1.5. Órganos del proceso

Juez

Funciones: lleva a cabo las diligencias previas al inicio del proceso y nombra al Supervisor de reorganización en la misma resolución judicial en la que inicia el proceso.

Supervisor

Funciones: informa al Juez sobre el estado de solvencia de la empresa en los treinta días posteriores a su nombramiento. Elabora un dictamen sobre la viabilidad del plan de pago propuesto y lo presenta al Juez y a todas las personas incluídas en el mismo, en el plazo de treinta días contados a partir de aquél en el que le fue entregado dicho plan. Debe aceptar o rechazar el plan, justificando su decisión. En los supuestos en que así lo establezca el plan, controlará la ejecución de las medidas previstas en el mismo para superar la crisis empresarial.

3.1.6. Efectos sobre el deudor y los acreedores

No será objeto de publicidad el inicio de este proceso con el fin de evitar que la empresa pierda credibilidad en el mercado.

Los acreedores pueden ejercitar sus derechos en la vía judicial tanto de naturaleza declarativa como ejecutiva. El derecho a solicitar la apertura del concurso de los sujetos legitimados tampoco sufre alteración jurídica alguna por el inicio de este proceso.

3.1.7. Efectos sobre las relaciones jurídicas preexistentes.

Con el fin de facilitar el recurso al proceso de reorganización, el legislador (URG) regula normas de protección de los contratos vigentes como es la prohibición de establecer entre las partes contratantes cláusulas que reconozcan un derecho de resolución (o la resolución automática) de las obligaciones contraídas como consecuencia del inicio de las diligencias previas del proceso de reorganización.

3.1.8. Terminación del proceso

Tiene dos causas fundamentalmente: el Supervisor no otorga su consentimiento al plan de reorganización presentado o, una vez aprobado, fracasa su ejecución.

4. PROCESO CONCURSAL DE DERECHO COMÚN PARA SITUACIONES DE CRISIS IRREVERSIBLES

4.1. EL PROCESO CONCURSAL.

4.1.1. Generalidades.

El ordenamiento jurídico austríaco regula el concurso en un cuerpo normativo independiente (KO) que ha sido reformado, por última vez, en 1997 (IEG).

El concurso está abierto a todo sujeto que tenga capacidad jurídica ya sea persona física o jurídica, empresario o no, si bien en los distintos supuestos se establecen especialidades procesales, como veremos.

El Derecho Concursal austríaco (KO) se rige por cuatro principios: 1º. *Par conditio creditorum*. 2º. Universalidad: ejecución general del patrimonio del deudor. 3º. Suspensión de la reclamación individual. 4º. Ejecución sin título de ejecución: el proceso concursal está abierto a cualquier acreedor que tenga un crédito contra el deudor, incluso no vencido.

El proceso se desarrolla en varias fases: 1. Apertura del concurso. 2. Junta de acreedores celebrada en los catorce primeros días. 3. Sesión de examen de los créditos, realizada en un plazo de 60 a 90 días. 4. Sesión de informe, en un plazo de 90 días, en la que se expondrá la situación patrimonial de la empresa y, en su caso, se propondrá convenio para el pago de los acreedores. 5. Sesión de liquidación. 6. Sesión de rendición de cuentas de la administración patrimonial o de reparto final.

4.1.2. Presupuesto subjetivo

Legitimación pasiva: se concibe como parte de la capacidad jurídica, y no de la capacidad de obrar, por lo que cualquier persona física o jurídica, tanto de derecho privado como público, mayor de edad o incluso menor, puede ser sujeto pasivo del proceso de concurso.

Legitimación activa: el concurso debe ser solicitado por persona legitimada y lo están tanto los acreedores (concurso forzoso) como el deudor (concurso voluntario) y, en el caso de las personas jurídicas, sus órganos de representación o sus socios personalmente responsables y cada acreedor. El Juez procederá de oficio a la apertura del proceso concursal cuando fracase el arreglo o el convenio forzoso y, concurran los presupuestos legales (KO).

4.1.3. Presupuesto objetivo

La ley (KO) establece un presupuesto objetivo *general* que consiste en la situación de insolvencia entendida como la incapacidad de pagar. La ley no define qué se entiende por insolvencia pero sí establece que ésta se presume cuando el deudor cesa en el pago de sus deudas.

La insolvencia se determina teniendo en cuenta la totalidad de las obligaciones del deudor y no sólo los créditos justificados por los acreedores que solicitaron la apertura del concurso.

La jurisprudencia exige que el deudor carezca, de modo permanente, de medios de pago para satisfacer sus obligaciones vencidas, situación que es compatible con el pago aislado de algunas deudas. También ha establecido algunos hechos exteriorizadores de la insolvencia como las ejecuciones pendientes, propuestas de arreglo extrajudicial, declaraciones repetidas de rebeldía en varios juicios y requerimientos reiterados de pago de cambiales.

Por otro lado, el legislador establece un presupuesto objetivo *singular* consistente en el endeudamiento excesivo, en el caso de personas jurídicas, la herencia yacente y la sociedad mercantil sin socio responsable personalmente. Concorre esta situación cuando el activo es inferior al pasivo y, añade la jurisprudencia, las perspectivas de subsistencia de la empresa son negativas.

4.1.4. Diligencias previas: apertura del proceso e impugnación.

Tanto si el concurso es iniciado de oficio o a instancia de parte, el Juez deberá resolver sin demora, una vez que compruebe la concurrencia de los presupuestos legales. Con este fin, al deudor se le notificará la solicitud de concurso y, si es posible dentro de un plazo razonable, se cursará el trámite de audiencia en el que será interrogado y se le informará del derecho que le asiste a solicitar un arreglo judicial.

El Juez comprobará de oficio, como un presupuesto de la apertura del proceso, si el patrimonio concursal es capaz de soportar el coste del inicio de las actuaciones procesales, entendiendo por tales las desarrolladas hasta la Sesión de informe. En esta valoración patrimonial, el Juez deberá tener en cuenta no sólo los bienes fácilmente realizables, sino también los valores efectivos, los créditos del deudor e incluso las solicitudes de revocación de actos jurídicos que hayan podido ejercitarse tras la apertura del concurso.

Si el patrimonio no cubre los gastos, el deudor o un acreedor podrá adelantar una cantidad determinada y evitar la terminación del concurso. El acreedor que desembolse el dinero podrá reclamarlo en el concurso y en el caso en que la masa no sea suficiente para satisfacer éste crédito dispondrá de acción en plazo de tres años frente a quien incumplió su obligación de solicitar la apertura del concurso.

Si el concurso es de persona jurídica, el Juez podrá incluir en la suficiencia patrimonial no sólo el patrimonio de ésta sino también el patrimonio privado de los órganos representativos de la empresa. Además, dichos órganos están obligados solidariamente a desembolsar por adelantado los gastos del proceso, en caso de

insuficiencia, y, posteriormente, podrán reclamarlo como créditos de la masa, pero con rango inferior a los gastos del Administrador y del procedimiento.

Por otro lado, el Juez desestimará la solicitud de apertura del concurso si la pretendida situación de insolvencia, o endeudamiento excesivo, carece manifiestamente de fundamento o, si el acreedor no justifica su título de crédito o, también, si la solicitud de concurso es abusiva como sería el caso del acreedor que tiene totalmente garantizado su crédito con un derecho de prenda.

Por el contrario, si concurren los presupuestos legales (KO), el Juez abrirá el concurso y el mismo continuará de oficio incluso en los casos en que desista el instante o la deuda del acreedor solicitante sea satisfecha.

Si el Juez necesita investigar aspectos relacionados con la concurrencia de los presupuestos de apertura del concurso, durante el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la apertura, podrá adoptar medidas cautelares -incluido el nombramiento de administrador provisional- que garanticen los bienes del deudor.

Contra la apertura del proceso cabe la interposición de recurso sin efecto suspensivo. *Publicidad:* Desde el día 1 de enero del presente año las resoluciones del concurso se publican únicamente por internet (<http://www.edikte.justiz.gv.at>) y los efectos de la apertura comenzarán al día siguiente de su publicación.

4.1.5. Órganos del Concurso

Juzgado del concurso.

Competencia objetiva: para la persona física, que no dirige una empresa será competente el Juzgado comarcal, en todos los demás supuestos será competente el Tribunal de 1ª Instancia.

Competencia territorial: lugar donde el deudor desempeñe su actividad empresarial o donde tenga su residencia habitual. Subsidiariamente, puede ser el lugar del establecimiento o el de ubicación del patrimonio del deudor.

Funciones: apertura y cierre del proceso concursal. Dirección del procedimiento. Amplias facultades de investigación. Nombramiento y control del Administrador de la

masa. Convocatoria y dirección de la Junta de Acreedores. Interviene en el reconocimiento de créditos.

Administrador de la masa concursal.

Es el órgano central del concurso cuya actuación está sujeta a la vigilancia del Juzgado y, en su caso, a la Junta de Acreedores y a la Comisión de Acreedores. En el proceso ante el Juez de 1ª Instancia es obligatorio nombrar un Administrador de la masa, lo que no se exige en el proceso de regulación de deudas.

Sujetos elegibles: cualquier persona física o jurídica con conocimientos suficientes sobre Derecho Mercantil o Economía de la empresa y que sea imparcial por carecer de relación de parentesco cercano o dependencia con alguna de las partes. Normalmente el nombramiento recae sobre abogados o asesores fiscales

Funciones: examina la situación económica del deudor. Decide si la empresa tiene que ser cerrada. Determina los activos elaborando un inventario y delimita los pasivos. Administra y representa legalmente a la masa. Examina los créditos y propone su reconocimiento. Distribuye el producto de la realización de la masa activa.

Remuneración: Tiene derecho a percibir honorarios por su trabajo cuyo montante ascenderá a la cantidad aprobada por el Juez, consultada, cuando exista, la Comisión de Acreedores.

La Junta de Acreedores.

Composición: la forman todos los acreedores del concurso (no de la masa) que participan en el procedimiento.

Función: velar por los intereses comunes y vigilar al Administrador de la masa y, cuando exista, a la Comisión de acreedores. Instar la constitución, cuando proceda, de la Comisión de Acreedores y solicitar la remoción del Administrador o de algún miembro de la citada Comisión.

Convocatoria: la primera Junta se convoca en el edicto de apertura del concurso dentro del plazo de catorce días. La segunda Sesión de la Junta se celebrará en el término máximo de 90 días y su finalidad consiste en informar y decidir sobre el futuro de la empresa y del procedimiento.

Quorum: la ley (KO) exige la presencia de al menos dos acreedores, con derecho de voto siquiera provisional, cuyos créditos cubran el 25% de la totalidad del pasivo. En los supuestos de convenio forzoso y plan de pagos se establece un *quorum* específico. En el concurso sumario no hay *quorum* mínimo. Tendrán derecho al voto los acreedores cuyos créditos hayan sido reconocidos por el Juez, a propuesta del Administrador de la masa, y que no hayan sido impugnados por parte legítima.

La Comisión de Acreedores.

Composición: únicamente se constituye en concursos de especial dificultad o trascendencia cuantitativa. Sus miembros son nombrados por el Juzgado pudiendo recaer (el nombramiento) sobre acreedores o cualquier otra persona física o jurídica. El número de miembros que la constituyen varía de tres a siete. Los acreedores tienen derecho a proponer al Juez sujetos elegibles. En los concursos ordinarios y en actuaciones urgentes, el Juzgado desarrolla sus funciones.

Función: autoriza operaciones importantes del Administrador de la masa (p.e. impugnaciones de actos ineficaces realizados por el deudor antes de la apertura del concurso) y recibe, en su caso, por disposición judicial encargos sobre negocios jurídicos acerca de los que, alguno de sus miembros, posea especiales conocimientos.

Convocatoria: por iniciativa del Administrador de la masa, del Juzgado o de la mayoría de sus miembros.

Quorum: las resoluciones se adoptan conforme al principio de mayoría (KO). No hay derecho de voto en causas del exclusivo interés de un miembro de la Comisión.

4.1.6. Efectos del concurso sobre el deudor

A) El deudor pierde su derecho de administrar y disponer del patrimonio concursal.

B) Retención de su correspondencia y puesta a disposición del Administrador de la masa.

C) Ocupación de los bienes presentes en el patrimonio del deudor en el momento de la apertura del concurso y los adquiridos con posterioridad, salvo los ingresos inembargables (sobre todo, el salario mínimo). El deudor debe elaborar un inventario de su patrimonio y manifestar la exigibilidad de los créditos de sus acreedores ante el Juzgado.

D) Restricción de la capacidad procesal del concursado por carecer de legitimación activa y pasiva en litigios relativos al concurso. El deudor tendrá plena capacidad procesal en litigios sobre el estado civil o prestaciones personales y, también podrá continuar como parte en procesos iniciados sobre bienes tácitamente excluidos de la masa concursal por no haber reclamado el Administrador la sustitución procesal del deudor.

E) Suspensión de procesos en curso, con las excepciones señaladas.

F) El deudor podrá solicitar que se le asignen alimentos con cargo a la masa cuando no pueda desempeñar una actividad remunerada que garantice una vida modesta para él y su familia. Tendrá derecho a residir con su familia en las habitaciones de una casa que pertenece a la masa, pagando por cuenta de los ingresos mínimos que perciba el arrendamiento de las mismas.

G) El deudor no podrá adquirir licencia para desarrollar una actividad industrial a menos que la apertura del concurso haya sido consecuencia del convenio forzoso, delito o concurso de un tercero.

Los efectos A), B) y D) no se producen, en principio, en el concurso de la persona física no empresaria ya que, en este caso, no se nombra un Administrador de la masa por lo que el deudor continúa administrando su patrimonio bajo autorización del Juzgado (KO).

4.1.7. Efectos del concurso sobre los acreedores

A) Todos los créditos no condicionales se tienen por vencidos a la fecha de la apertura del concurso.

B) Convertibilidad de todos los créditos en títulos dinerarios de moneda nacional si no lo fueran antes de la apertura del concurso. A partir del 1 de julio de 2002 la única

moneda nacional será el euro por lo que el chelín austríaco (ATS) carecerá de valor oficial.

C) No tendrán efecto liberatorio los pagos efectuados al deudor salvo que los mismos ingresen efectivamente en la masa o que el tercero ignore, sin culpa alguna de su parte, la apertura del concurso. La carga de la prueba recae sobre el deudor del concursado de tal forma que si no logra probar su diligencia deberá satisfacer de nuevo la deuda. Esta regla no se aplica cuando el concursado conserve la administración y disposición de su patrimonio.

D) Cese del devengo de intereses de los créditos frente al deudor concursado.

E) Los créditos periódicos con plazo determinado se suman y se deducen los intereses pendientes; los que tienen plazo indeterminado se evalúan en el momento de apertura del concurso.

F) Prohibición de acciones individuales ejecutivas contra los bienes de la masa concursal.

G) La posibilidad de compensación exige el cumplimiento de unos requisitos legales: a) Las pretensiones compensables deben ser similares, aunque no necesariamente patrimoniales. b) Ambos créditos deben existir en el momento de la apertura del concurso. c) No se prohíbe la compensación en caso de créditos condicionales aunque el Tribunal puede exigir una caución. d) No es compensable el crédito que nació dentro de los seis meses anteriores a la apertura del concurso si el acreedor conocía o debería haber conocido la insolvencia del deudor.

4.1.8. Efectos del concurso sobre los actos perjudiciales para los acreedores. El sistema revocatorio.

Los actos jurídicos de disposición o administración patrimonial realizados por el deudor antes de la apertura del concurso son susceptibles de impugnación por ineficacia relativa si perjudican a los acreedores (KO).

Legitimación activa: el Administrador de la masa y, si no lo hubiere, los acreedores del deudor.

Legitimación pasiva: la parte contratante del deudor.

Plazo: un mes a partir de la apertura del concurso. No tiene carácter preclusivo.

Supuestos:

A) Ineficacia por intención de perjudicar: son impugnables los actos jurídicos celebrados los diez años anteriores a la apertura del concurso si ambas partes conocían y consintieron en el perjuicio. También lo serán los celebrados en los dos años anteriores a la apertura si el deudor consintió en el perjuicio pero el contratante lo ignoraba por culpa leve.

B) Ineficacia por dilapidación patrimonial: son impugnables los actos que tuvieron lugar dentro del año anterior a la apertura del concurso cuando el tercero pudo reconocer la dilapidación.

C) Ineficacia por gratuidad: las transmisiones hechas a título gratuito son siempre impugnables, con la única excepción de pequeños regalos.

D) Ineficacia por encubrimiento: son impugnables los actos satisfactorios o afianzadores de deudas realizados por el deudor, después de conocer su situación de insolvencia (o de endeudamiento excesivo), o después de la apertura del concurso, o en los sesenta días anteriores a la misma, en los dos casos siguientes: a) si el deudor no ha recibido contraprestación alguna equivalente a su entrega y b) si habiéndola recibido, el deudor conoce el trato favorable que dispensa al acreedor y el acreedor lo ignora imprudentemente.

E) Ineficacia por conocimiento de la insolvencia: son impugnables los actos jurídicos perjudiciales para el tercero y la satisfacción o fianza de un acreedor si fueron celebrados después de la insolvencia (o del endeudamiento excesivo) o de la solicitud de apertura de concurso pero dentro de los últimos seis meses antes de la apertura del concurso, si el tercero o el acreedor conocían la situación del deudor o, también, si la desconocían por culpa propia. En este supuesto no es preciso que el deudor conozca su situación de insolvencia.

Carga de la prueba: el Administrador de la masa deberá probar la imprudencia del tercero o del acreedor al no conocer la situación del deudor, excepto si concurre

parentesco cercano en alguno de ellos ya que en este caso se invierte la carga de la prueba.

4.1.9. Efectos del concurso sobre las relaciones jurídicas preexistentes.

A) Cumplimiento de contratos sinalagmáticos: a) Si el acreedor ha cumplido su obligación pero no el deudor, el acreedor obtendrá solamente la cuota correspondiente a su crédito. b) Si el deudor ha cumplido pero no el acreedor, éste tiene que devolver a la masa lo que percibió. c) Si ambas partes todavía no han cumplido (total o parcialmente el contrato), el Administrador de la masa tiene derecho de elección entre desistir del contrato o cumplirlo. En el primer caso, las exigencias sinalagmáticas se extinguen y las posibles reclamaciones por daños y perjuicios posteriores constituirán créditos del concurso. En el segundo caso, tendrá que cumplir toda su obligación y la pretensión del acreedor será un crédito de la masa.

B) Obligaciones de carácter duradero: a) Contratos de arrendamiento: si el deudor es arrendatario, tanto el Administrador de la masa como el arrendador pueden ejercitar la resolución del contrato ateniéndose a los plazos legales de anticipación, o bien, a los contractuales, pero sólo si son más cortos que los anteriores. Esta regla también se aplica al arrendamiento financiero (*leasing*). Si el deudor es arrendador, no hay reglas concursales específicas. b) Contratos de trabajo: en el concurso del empleador, el Administrador de la masa ostenta el derecho de despido privilegiado y también los empleados pueden ejercer el derecho de dimisión. El Administrador solamente tiene que respetar los plazos de despido mínimo (legales, contractuales o fijados en los convenios colectivos) y no está obligado a seguir las fechas de preaviso, salvo lo excluido expresamente por el legislador (KO).

4.1.10. Efectos penales de la apertura del concurso

Especialmente los órganos representativos de una sociedad se enfrentan a una responsabilidad civil y penal en caso de no cumplir con el deber de solicitar el concurso voluntario; la primera consiste en la indemnización por daños y perjuicios y la penal, en una sanción tipificada por el legislador.

El Código Penal Austríaco también castiga el delito imprudente de concurso.

Y, por su parte, la Ley Concursal (KO) prevé tres supuestos en los que el Juez del concurso debe dirigirse al Fiscal para que instruya diligencias penales: a) Si la persona física o el órgano representativo de la persona jurídica se niega a entregar una lista de los bienes o a firmar la presentada. b) Si el deudor se fuga. c) Si el Juez tiene indicios racionales de que el deudor ha incurrido en un ilícito penal.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación general del Juez Concursal de prestar la cooperación jurisdiccional que requiera el Fiscal o el Juzgado Penal.

4.1.11. Continuación de la empresa durante el proceso de concurso

Desde la apertura del concurso hasta la celebración de la Sesión de informe el Administrador continuará la actividad empresarial excepto si la misma supone un riesgo en el incremento de las pérdidas de los acreedores, en cuyo caso el Juez deberá autorizar el cierre de la empresa.

En la Sesión de informe, el Administrador de la masa tiene que pronunciarse ante el Juez y los acreedores sobre la viabilidad de la empresa, proponiendo su continuación total o parcial o, el cierre de la misma. También emitirá su parecer sobre la protección de los intereses de los acreedores en el supuesto de solicitud por el concursado de convenio forzoso. Al Juez le compete decidir tanto el cierre como la continuación de la empresa, una vez emitida la información al respecto del Administrador.

El Juez ordenará el cierre de la empresa si el concursado, transcurrido un año desde la fecha de apertura del concurso, no obtiene la aprobación de la propuesta sobre convenio forzoso.

4.1.12. Delimitación del pasivo y de los derechos de terceros sobre el patrimonio del deudor.

En relación a los derechos de los acreedores y el proceso concursal podemos distinguir cuatro clases con un régimen sustantivo y procesal propio (KO): A) Los acreedores con derecho de separación. B) Los acreedores con derecho de ejecución separada. C) Los acreedores de la masa. D) Los acreedores del concurso.

A) Los *acreedores con derecho de separación* ostentan la titularidad sobre bienes que en el momento de la apertura del concurso están en poder del concursado pero que no forman parte de su patrimonio por lo que no deben ser afectados al proceso concursal: si lo hubieran sido, el acreedor deberá reclamar al Administrador, y no al concursado, la entrega del bien. Son los supuestos de bienes de pertenencia ajena (propiedad, reserva de propiedad, administración fiduciaria, etc).

Si el bien que se encuentra en poder del concursado es un medio de producción, el propietario no podrá ejercitar su derecho de separación durante los primeros noventa días desde la apertura del concurso (es decir, hasta la Sesión de informe) si la privación del mismo pone en peligro la continuación de la empresa, a menos que acredite un perjuicio grave en sus intereses personales o económicos.

B) Los *acreedores con derecho de ejecución separada* tienen el privilegio de poder hacer efectivos sus créditos al margen del proceso concursal al estar los mismos garantizados con determinados bienes. En principio, estos acreedores no quedarán afectados por la apertura del concurso, salvo las excepciones legalmente establecidas.

Estos acreedores tampoco podrán ejercitar su derecho si se trata de realizar una garantía real sobre un bien de producción del que depende, en gran medida, la continuación de la empresa.

Los acreedores podrán hacer valer frente al Administrador sus derechos de ejecución separada durante el proceso de concurso.

C) Los *acreedores de la masa concursal* son los titulares de créditos derivados de operaciones y trabajos de la gestión del concurso. Sus deudas deben ser satisfechas con preferencia sobre los créditos de los acreedores del concurso. Constituyen un grupo

tasado, en el que se encuentran, entre los más importantes, los siguientes: a) Gastos del procedimiento. b) Gastos y retribución del Administrador. c) Impuestos, tasas y contribuciones públicas. d) Créditos laborales posteriores a la apertura del concurso. e) Gastos reclamados por las sociedades protectoras de los intereses de los acreedores. f) Reclamaciones por enriquecimiento injusto de la masa.

Si la masa concursal no es suficiente para satisfacer todos los créditos de la masa, la ley establece que se pagarán preferentemente los gastos del Administrador, los salarios de los empleados (posteriores a la apertura del concurso) y los gastos del procedimiento.

Los créditos de la masa tienen que ser satisfechos a su vencimiento, siempre que sean suficientemente justificados, cualquiera que sea la fase en la que se encuentre el proceso.

Por tanto, estos créditos no tienen que ser examinados ni reconocidos dentro de los trámites previstos para los créditos concursales.

Si el Administrador se opone a la satisfacción de un crédito de la masa, el acreedor puede reclamar ante el Juez concursal en el mismo proceso o demandar al Administrador en un proceso independiente y si la pretensión del acreedor fuera estimada la sentencia podrá ser ejecutada sobre la masa concursal.

D) Los *acreedores del concurso* son aquellos frente a los que el deudor contrajo deudas antes de la apertura del concurso.

La ley no admite ningún privilegio entre estos acreedores. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido un grupo de rango inferior, que sólo podrán cobrar sus créditos cuando los acreedores del concurso sean pagados íntegramente y está constituido por los socios de la empresa en concurso que le prestaron dinero cuando ésta ya se encontraba en situación de insolvencia.

El proceso concursal austriaco prevé la *Sesión de examen de créditos* en la que se valorará la cuantía de los mismos a los solos efectos de establecer el derecho de participación en el proceso concursal (por tanto, sin que este trámite tenga eficacia de cosa juzgada sobre la existencia del crédito). Con este fin, los acreedores deberán solicitar al Juez, dentro del plazo fijado, su inclusión en la masa pasiva aún en el caso en

que dispongan de título ejecutivo o esté pendiente de resolución judicial la exigibilidad del crédito.

La solicitud de admisión presentada fuera de plazo no implica preclusión del derecho del acreedor a solicitar el cobro dentro del proceso concursal, a menos que la misma se presente en las dos semanas anteriores a la Sesión de examen de la cuenta final. El crédito del acreedor retrasado podrá ser incluido en la lista para examen pero correrán de su cuenta los gastos realizados en la actividad procesal añadida.

El Administrador deberá elaborar un listado de los créditos presentados a examen del que dará traslado al Juez.

En la Sesión de examen, el Administrador informará al Juez, en presencia del deudor y de los acreedores, sobre el reconocimiento o exclusión de los créditos presentados. La negativa aislada del deudor al reconocimiento de un crédito no tiene efecto sobre el proceso concursal pero impedirá que el acreedor disponga de título de ejecución una vez clausurado el concurso. También cada acreedor cuyo crédito haya sido reconocido o tenga derecho de voto puede negar el reconocimiento de los créditos del resto de acreedores. El crédito será reconocido cuando ni el Administrador ni los acreedores lo excluyan: si en el proceso no hay Administrador, la posición decisiva será la que adopten deudor y acreedores.

Los acreedores cuyos créditos no hayan sido reconocidos pueden iniciar un proceso declarativo ante el Juez concursal para que se pronuncie sobre el crédito controvertido. En el caso en que el crédito estuviera siendo objeto de discusión en un litigio antes de la apertura del proceso concursal, el juicio singular será suspendido hasta que se celebre la Sesión de examen y, acabada ésta, cesará la interrupción si el crédito no es reconocido. Y si se trata de un crédito no reconocido, justificado con un título de ejecución, quien niegue el reconocimiento del mismo deberá iniciar el proceso de declaración.

Las cuotas correspondientes a los créditos litigiosos serán retenidas en depósito judicial hasta que recaiga resolución firme.

4.1.13. Liquidación del activo.

El Administrador es la persona responsable de la liquidación de la masa. Los modos más frecuentes de realización de los bienes son la subasta judicial y la enajenación extrajudicial, aunque no son los únicos ya que el Administrador puede acudir a otros sistemas que considere más ventajosos siempre que obtenga las autorizaciones exigidas por el legislador (KO). El producto de la realización será repartido conforme a las reglas concursales.

El beneficio de los acreedores exige que, en el supuesto de embargo de la empresa se lleve a cabo la enajenación completa de la misma porque de este modo se evita la depreciación de la misma por la venta aislada de sus elementos de producción.

Los acreedores con derecho de ejecución separada deben ser informados de la intención del Administrador, en su caso, de proceder a la venta extrajudicial de los bienes con el fin de que puedan ejercitar el derecho a oponerse a la misma en el plazo de catorce días. La oposición tendrá eficacia si el acreedor logra constatar que la subasta judicial será más ventajosa para él.

4.1.14. Reparto del activo liquidado

El Administrador de la masa es el órgano encargado de realizar el reparto del activo con el consentimiento del Juez y previo conocimiento de la Comisión de Acreedores, cuando exista. El producto de la venta de todos los bienes de la masa será repartido entre los acreedores del concurso, una vez que todos los créditos de los acreedores de la masa hayan sido satisfechos. Por su parte, los acreedores con derecho de ejecución separada obtendrán la satisfacción de sus créditos con el producto obtenido por la venta de los bienes dados en garantía.

El reparto del activo liquidado sólo se efectuará finalizada la Sesión de examen general de los créditos y se llevará a cabo por cuotas, que se determinarán dividiendo el producto de la masa activa por la suma de todos los créditos de los acreedores concursales. No se tendrán en cuenta los acreedores cuyos créditos sean de cuantía

ínfima. Los créditos se irán satisfaciendo en la medida en que se vaya obteniendo el producto de la venta de los bienes del concursado por lo que los repartos se irán sucediendo en el tiempo en la medida que se dispongan de cantidades para repartir.

El legislador concursal (KO) distingue entre dos momentos de reparto: el reparto de pago a cuenta y el reparto final.

El primero se lleva a cabo después de la Sesión de examen y participarán en el mismo todos los acreedores cuyos créditos han sido reconocidos en el proceso concursal. La cuota correspondiente a los acreedores cuyos créditos han sido excluidos en la citada Sesión o están sometidos a condición permanecerán en depósito judicial a menos que el acreedor hubiera prestado caución suficiente.

El segundo, reparto final, tiene lugar en Sesión específica cuando la masa ha sido completamente realizada y, todas las impugnaciones y procesos declarativos incoados frente a las exclusiones de créditos, hayan sido definitivamente resueltos. En esta Sesión se culminará la liquidación de la masa activa y la pasiva del proceso concursal. Para ello, el Administrador presentará una propuesta de reparto final en la que incluirá la rendición de cuentas de su gestión, que pasará a la Comisión de Acreedores para que preste su conformidad y posteriormente deberá ser examinada por el Juez.

4.1.15. Terminación del juicio de concurso

La Sesión de reparto final concluye el proceso concursal. Excepcionalmente, puede requerirse la celebración de una sesión de reparto suplementaria en el supuesto en que aparecieran bienes con posterioridad al reparto final, que no formaron parte de la masa concursal, o si quedaran desafectados los bienes conservados en depósito judicial: en ambos casos la cuantía obtenida será repartida entre los acreedores.

Otro modo de terminación del proceso es el convenio forzoso, del que hablaremos a continuación.

La ley (KO) también establece, como hemos visto anteriormente, que el proceso terminará por falta de activo suficiente para cubrir los gastos del proceso.

4.1.16. Terminación del juicio por convenio con los acreedores.

La ley (KO) establece un doble régimen: el convenio forzoso para cualquier persona física o jurídica no excluida expresamente por la ley y, el plan de pagos y el proceso de gravamen sólo para personas físicas, que veremos en el siguiente apartado.

El convenio forzoso permite un saneamiento de la empresa por suspensión de pagos y remisión del sobrante de la cuota pactada sobre los créditos e impide su liquidación.

Falta de legitimación: no podrán solicitar convenio forzoso los concursados que se hubieran fugado, los que hayan sido condenados por insolvencia fraudulenta y los que no presentaron al Juez el informe de sus bienes o los balances.

Requisitos mínimos de la solicitud: a) Ausencia de perjuicio a los acreedores con derecho de separación o de ejecución separada. b) Pago íntegro a los acreedores de la masa. c) Satisfacción de todos los acreedores del concurso, excepto si alguno de ellos acepta expresamente la remisión de parte de su crédito. d) Cuota mínima del 20% de los créditos a pagar en dos años. Si el deudor no dirige una empresa la cuota mínima puede ser del 30% en un plazo de cinco años.

Procedimiento el Administrador, en la Sesión de informe, debe pronunciarse sobre la posibilidad de adoptar un convenio forzoso atendiendo al interés de los acreedores. En caso afirmativo, el deudor dispone de 14 días para presentar la solicitud de convenio. Durante este plazo pesa sobre el Administrador la prohibición de liquidar la empresa. Solicitado el convenio en plazo, el Juez fijará fecha para celebrar la Sesión de conciliación en término de seis semanas. Transcurridos 90 días desde la solicitud sin que haya sido aceptada, o si la misma se aceptó pero posteriormente se rechaza, podrá iniciarse la liquidación de la empresa.

A la Sesión de conciliación comparecerá necesariamente el deudor. La ley (KO) establece el régimen de mayorías necesarias para la aprobación del convenio así como el porcentaje de créditos mínimo a cubrir. Aceptado por los acreedores, el convenio tiene que ser aprobado por el Juez. Frente a la decisión judicial cabe recurso.

Transcurrido un año desde la apertura del concurso sin que se haya logrado acuerdo sobre el convenio, la empresa será cerrada a menos que se logre, excepcionalmente la prolongación por otro año como máximo.

Efectos jurídicos: el convenio firme libera al deudor de la obligación jurídica sobre el exceso de la cuota aprobada, pero se mantiene la obligación natural. El convenio y sus efectos vinculan a todos los acreedores, incluso a los ausentes. Si el deudor incurre en mora en el pago de alguna cuota vencida pierde las ventajas del convenio -remisión de la diferencia entre el porcentaje de la cuota y el total de créditos y suspensión de pagos- para las sumas parciales que le falte por pagar.

4.1.17. Rehabilitación del deudor.

Finalizado el concurso por la aceptación firme del convenio, puede perdurar alguna medida de control sobre el deudor (a través del convenio de vigilancia o de gestión fiduciaria) o, por el contrario, reintegrarle en su poder de disposición patrimonial sobre la masa concursal.

4.2. ESPECIALIDADES DEL CONCURSO PARA LAS PERSONAS FISICAS

Todas las personas físicas podrán acudir al proceso de plan de pago y proceso de gravamen, pero el no empresario -tanto si nunca lo fue como si dejó de serlo- dispone también del proceso de regulación de las deudas.

Estos procesos, a diferencia del concurso, no precisan de un patrimonio mínimo que cubra gastos del proceso pero sí requieren la presentación de un plan de pago cuyo cumplimiento garantizará el solicitante y la manifestación de bienes. Si el deudor no es empresario tendrá que certificar que ha fracasado el intento de arreglo amistoso con los acreedores o que el mismo sería inútil.

Proceso de regulación de deudas.

Proceso concursal de personas físicas no empresarias.

Si el activo no supera, en una estimación aproximada, las 500.000 ATS, las funciones judiciales las desempeñará un administrador judicial. El propio deudor administrará el patrimonio concursal: el nombramiento de administrador de la masa sólo está previsto para supuestos de falta de claridad en la situación financiera o posible perjuicio para los acreedores. El deudor puede ser representado en juicio por alguna institución de asesoramiento de deudores.

Las deudas podrán satisfacerse dentro del proceso a través de convenio amistoso, convenio forzoso, plan de pago o proceso de gravamen. La finalidad de estos cauces jurídicos es obtener la liberación de las deudas pendientes de pago del deudor a través de la correspondiente resolución judicial: no obstante, la parte que no pueda ser pagada permanecerá como obligación natural.

Este proceso está abierto tanto a las personas físicas que nunca desempeñaron actividad empresarial como a las que han dejado de ejercitarlo a causa de la liquidación patrimonial en proceso de concurso.

Plan de pago.

Es una forma especial de convenio forzoso abierto a toda persona física. A diferencia del convenio forzoso, no está prevista cuota mínima porcentual sobre el pasivo a satisfacer pero sí se establece un plazo máximo de cumplimiento de siete años. Además la ley exige que la cuota de pago propuesta por el deudor sea proporcionada a los ingresos económicos que éste perciba en los cinco años posteriores.

Sólo es posible votar el plan de pago una vez que la masa pasiva haya sido liquidada. Los acreedores cuyos créditos no hayan sido reconocidos no podrán intervenir en la votación, aunque sí podrán recibir la cuota correspondiente en la medida que sea compatible con la situación económica del deudor.

El legislador permite la proposición de un nuevo plan y su consiguiente votación si la situación del deudor se deteriorase sin su culpa.

Proceso de gravamen.

El objetivo es la liberación de las deudas restantes del deudor y una satisfacción mínima de los acreedores. Sólo se admite ante el fracaso del plan de pago, principalmente por falta de apoyo de los acreedores.

Para obtener la liberación señalada se precisa que el plazo de duración del procedimiento sea de unos siete años y que cubra una cuota mínima del 10% de los créditos. También surte efecto liberador el pago del 50% de la cuota en un proceso de tres años de duración. Finalmente, si el deudor no logra satisfacer el 10% en los siete años previstos, el Juez podrá otorgarle la liberación de la deuda o prolongar el proceso en los tres años siguientes.

Si el Juez considera que el plan de pago es conveniente, lo impondrá de oficio a los acreedores. La ley establece unas causas cuya alegación y prueba impiden el inicio o continuación del procedimiento pero exige que las mismas sean alegadas a instancia de parte (entre otras, condena penal por delitos económicos, incumplimiento de la obligación de informar en el proceso concursal, no haber transcurrido veinte años desde el anterior proceso de gravamen).

La figura central es el fideicomisario que adquiere el sobrante de los bienes inembargables del deudor (por cesión del deudor o por entrega directa del empleador) para invertirlos convenientemente e ir satisfaciendo las deudas de los acreedores en períodos de seis meses. Los acreedores pueden solicitar al Juez que el papel del fideicomisario se extienda también a la persona del deudor.

Obligaciones del deudor durante el desarrollo del procedimiento: debe realizar actividad asalariada sin posibilidad de rechazar ningún trabajo razonable que se le ofrezca; notificará cada cambio de domicilio o de lugar de trabajo; no puede discriminar positivamente a acreedor alguno; ni adquirirá nuevas obligaciones que no pueda cumplir.

Si el deudor infringe estas obligaciones y perjudica a los acreedores, cualquiera de éstos podrá solicitar la suspensión del procedimiento en el término del año siguiente

al conocimiento de la infracción. Si se decide la suspensión, el deudor habrá perdido la posibilidad de liberar las deudas restantes.

4.3. EL CONCURSO SUMARIO PARA LA PEQUEÑA EMPRESA

En el supuesto en que el activo de la empresa no vaya a superar probablemente la cantidad de 500.000 ATS, el Juez puede decidir, en la fase de apertura, que se trata de un concurso de poco valor (KO). Frente a esta decisión no cabe recurso.

Diferencias con el concurso común: no hay *quorum* mínimo en las decisiones de la Junta de Acreedores. En la Sesión de examen se podrán decidir cuestiones relacionadas con el reparto final sin necesidad de realizar una sesión independiente.

5. EL PROCESO CONCURSAL PARA SITUACIONES DE CRISIS REVERSIBLES.

5.1. EL PROCESO DE ARREGLO

5.1.1. Generalidades.

Prevé una conciliación ordenada entre los intereses generales de todos los acreedores y el interés del deudor a través de la sanación de la situación económica del deudor (AO). Se diferencia de los convenios amistosos, en los que acreedores y deudor tratan de alcanzar una solución a la situación económica, porque éstos son independientes entre sí mientras que el arreglo se desarrolla ante el Juez con la finalidad de establecer una solución vinculante para todos.

5.1.2. Presupuesto subjetivo

Legitimación pasiva: cualquier persona física o jurídica puede solicitar un arreglo, excepto las empresas aseguradoras y las entidades de crédito.

Legitimación activa: el propio deudor exclusivamente. Carecen de legitimación: el deudor que hubiera huído, el que haya sido condenado por delito de concurso fraudulento o frente al que, en los últimos cinco años, se haya abierto un proceso de concurso o arreglo, o bien si aquél no se abrió por falta de patrimonio (AO).

5.1.3. Presupuesto objetivo.

Consiste en la insolvencia o el exceso del pasivo sobre el activo como consecuencia de una crisis económica temporánea, de intensidad inferior a la prevista para el concurso. La apertura del proceso requiere que el deudor esté en condiciones económicas de cubrir la cuota legal mínima del 40% a pagar en dos años (AO).

5.1.4. Diligencias previas: apertura del proceso e impugnación.

El deudor presentará junto con la propuesta de arreglo, un informe del patrimonio, copia del documento justificante de su estado civil, un listado de acreedores y deudores y, los balances de los últimos tres años.

El Juez comprobará la concurrencia de los presupuestos subjetivos y objetivos y decidirá sobre la apertura del proceso de arreglo con una resolución judicial inimpugnable.

5.1.5. Órganos del arreglo

Juez del arreglo

El régimen procesal es similar al del Juez del proceso concursal.

Funciones: controla al Administrador del arreglo; puede darle instrucciones, solicitar la elaboración de informes, inspeccionar sus archivos y despedirle si concurre causa proporcionada. El cierre o la apertura de una empresa requieren siempre el consentimiento del Juez.

Administrador del arreglo

Es nombrado por el Juez en el acto de apertura del proceso de arreglo. Los requisitos relativos a los sujetos elegibles son idénticos a los del proceso concursal.

Funciones: investigar la situación económica del deudor y emitir un informe. Controlar al deudor y su gestión de la empresa. Prestar su consentimiento en los negocios jurídicos en los que así lo disponga el legislador. Examinar los créditos presentados para su reconocimiento. En su caso, controlar al deudor tras la finalización del arreglo, si fuera necesario.

Junta de Acreedores

Sólo se vota la propuesta de arreglo presentada por el deudor que debe respetar la cuota legal mínima del 40% pagable en dos años.

Consejo de Acreedores

Es similar a la Comisión de Acreedores del proceso concursal.

Funciones: Asesora y controla al Administrador del arreglo. En algunos supuestos, la ley exige al Administrador que recabe la opinión de este Consejo (AO).

5.1.6. Efectos del arreglo sobre el deudor

A) Limitación de la capacidad de contratar del deudor al permanecer bajo el control del Administrador del arreglo (KO). Los actos de administración extraordinaria que el deudor quiera llevar a cabo sobre su patrimonio requieren la expresa autorización del Administrador (AO).

B) El juez está facultado para establecer medidas específicas que garanticen el patrimonio y la continuación de la empresa que consistirán, con carácter general, en la exigencia de control previo del Administrador de los actos jurídicos o en la prohibición de realizarlos.

C) No será modificada la capacidad procesal del deudor.

5.1.7. Efectos del arreglo sobre los acreedores

A) Suspensión de las ejecuciones pendientes sobre el patrimonio del deudor.

B) Si es necesario, quedarán suspendidos los derechos de separación y ejecución separada durante 90 días. Si los derechos afectan a bienes que son imprescindibles para la continuación de la empresa la suspensión será obligatoria.

C) Quedarán afectados por el proceso de arreglo los derechos de separación ejecutados en vía judicial durante los 60 días previos a la apertura del arreglo.

D) Con la apertura del proceso, se prohíbe el inicio de cualquier proceso de ejecución separada y tampoco se podrán realizar estos derechos por vía convencional, sin el consentimiento del Administrador del arreglo.

E) La compensación se produce en los mismos términos que en el proceso concursal.

5.1.8. Efectos del arreglo sobre las relaciones jurídicas preexistentes

A) Por regla general, en los negocios jurídicos sinalagmáticos la ley distingue entre dos supuestos: a) Si ninguna parte ha cumplido totalmente su obligación indivisible el deudor tiene derecho de elección, previo consentimiento del Administrador, entre el retraso en el cumplimiento de la misma o realizarlo sin dilación. b) Si se trata de una obligación divisible y el acreedor ha cumplido en el momento de la apertura una parte del contrato podrá ejercitar su pretensión de cobro en el proceso de arreglo, mientras que el deudor tendrá el derecho de elección sobre la parte no cumplida, con el consentimiento del Administrador.

B) Contratos de arrendamiento: si el deudor es el arrendatario dispone de un derecho de revocar el contrato, previo consentimiento del Administrador, en el término del mes siguiente a la apertura del proceso debiendo cumplir con el plazo de preaviso legal, o convencional si fuera más breve.

C) Contratos laborales: de forma semejante al proceso concursal, el deudor - previo consentimiento del Administrador del arreglo- puede ejercitar el derecho de despido de los trabajadores que no sean imprescindibles para la continuación de la empresa. No obstante, deberá respetar los plazos de despidos legales y los fijados en los convenios colectivos, pero no precisa respetar los plazos convencionales si son más

largos que los primeros. Los créditos para indemnizar el despido de los trabajadores pertenecen a la categoría común (créditos del arreglo).

D) Protección específica de ciertos contratos: pesa una prohibición de resolución sobre los acreedores cuando se trate de contratos necesarios para la continuación de la empresa y contratos de arrendamiento. El arrendador no puede resolver el contrato ni siquiera en el supuesto en que concurra una causa plenamente justificada de resolución porque el deudor no ha pagado el alquiler durante los nueve meses anteriores a la apertura del arreglo, y si el deshaucio se hubiera ejecutado se anulará una vez que se acuerde el arreglo.

5.1.9. Determinación del pasivo y de los derechos de terceros.

El legislador ha establecido los llamados *créditos privilegiados del arreglo*, entre los que se encuentran los gastos realizados por el Administrador y el deudor en el ejercicio de la continuación de la actividad empresarial (AO). Estos créditos tienen que ser pagados íntegramente; de lo contrario, el arreglo fracasará. Además, están los *créditos del arreglo* que se corresponden con los créditos del concurso en el proceso concursal (AO).

Procedimiento: Los acreedores del deudor solicitarán la inclusión de sus créditos en el plazo legal establecido y publicado en internet, para lo cual recibirán la oportuna comunicación del Juzgado. El Administrador irá inscribiendo las solicitudes en un registro específico (AO). Tanto el deudor como el Administrador deberán pronunciarse, inicialmente, por escrito sobre cada solicitud. Con posterioridad, en la llamada *Sesión de arreglo* los acreedores pueden impugnar el reconocimiento de los créditos: el Administrador podrá modificar en esta sesión su criterio inicial, pero esto no se le permite al deudor.

Esta Sesión tendrá lugar dentro de las seis semanas siguientes a la apertura del proceso y a la misma tendrá que asistir el deudor, de lo contrario se tendrá por retirada su propuesta de arreglo, salvo que concurra causa suficiente que justifique esta ausencia.

El Administrador se pronunciará sobre la situación económica del deudor antes de proceder a la votación del arreglo.

Votación: el régimen es similar al expuesto en sede de convenio forzoso tanto en relación al derecho de voto como a las mayorías exigidas para la aprobación.

Confirmación del arreglo por el Juez: una vez aceptada la proposición del deudor por los acreedores, el arreglo necesita de confirmación judicial. La ley establece causas imperativas por las que el Juez puede negar eficacia jurídica al arreglo pero también se contemplan causas de naturaleza dispositiva. Tanto la confirmación como la negación son susceptibles de recurso.

Efectos del arreglo confirmado por el Juez: con carácter general, los efectos jurídicos de un arreglo confirmado judicialmente son los mismos que los producidos por el convenio forzoso. En particular, el acreedor que solicitó el reconocimiento de su crédito dispondrá -una vez confirmado el arreglo- de título de ejecución si aquél (el crédito) no fue impugnado en el proceso ni por el deudor ni por el Administrador del arreglo.

Efectos del arreglo en la situación del deudor: aceptado el arreglo la esfera jurídica del deudor puede verse afectada de los siguientes modos: a. Control del deudor por un curador al que se le transmite el patrimonio (arreglo fideicomisario). b. Control del deudor por un curador sin transmisión del patrimonio (arreglo control). c. Suspensión del arreglo sin control del deudor. d. Continuación del arreglo: los órganos permanecen en sus cargos y se mantienen las limitaciones del deudor sobre la disponibilidad de sus bienes.

5.1.10. Concurso consecutivo a un arreglo

El fracaso del arreglo tiene como consecuencia jurídica la apertura de oficio del proceso concursal si concurren los presupuestos legales establecidos al efecto. El fracaso será producido principalmente porque el deudor retira la solicitud antes de la celebración de la Sesión de arreglo, o por el incumplimiento de determinadas obligaciones impuestas por la ley al deudor, o, finalmente por el transcurso del tiempo

ya que si el arreglo no se acepta en los 90 días siguientes a la apertura del proceso, éste concluirá.

6. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA SUPUESTOS CONCRETOS

Sólo se establecen para Entidades de Créditos y Aseguradoras. Los demás entes jurídicos, tanto privados como públicos, pueden ser sujetos del proceso de concurso y de arreglo.

6.1. Entidades públicas.

La doctrina admite la apertura del concurso de un ente de derecho público. Incluso, en la práctica forense, algunos Municipios han sido sujetos pasivos de procesos de concurso: sin embargo, esta cuestión ha sido sólo admitida en teoría en relación al concurso de los Estados Federados o del propio Estado.

6.2. Entidades de crédito.

No les está permitido beneficiarse del convenio forzoso ni pueden solicitar la apertura del proceso de arreglo.

Legitimación para solicitar el concurso: exclusivamente se le reconoce al Ministro de Hacienda Pública que lo ejecuta por la procuraduría de Hacienda.

Medidas de intervención: las Entidades de Crédito cuya situación sea de crisis momentánea -porque su incapacidad de pago o el endeudamiento excesivo no es definitivo-, pueden solicitar al Juez el control de su actividad crediticia. Este control implica la suspensión de la exigibilidad de los créditos así como la interrupción de los intereses de los mismos.

Durante el tiempo que permanezca bajo la intervención, la Entidad de Crédito no podrá ser sujeto de un proceso de concurso. La intervención finaliza por resolución judicial o por la apertura del concurso en los supuestos admitidos por el legislador. Para la salvaguarda de los intereses de los clientes se les reconoce el derecho de compensación frente a la Entidad de crédito, en caso de concurso.

6.3. Entidades Aseguradoras.

Tampoco les está permitido beneficiarse del convenio forzoso ni del proceso de arreglo.

Legitimación para solicitar la apertura del concurso: está limitada a la autoridad que ejerce el control sobre este tipo de empresas.

Delimitación de la masa pasiva: los créditos de contratos de seguros tienen prioridad sobre los demás créditos del concurso.

II. IL FALLIMENTO IN EUROPA: GRECIA***

***** Con la colaboración de Constantine Papacostopoulos (KPMG Grecia), Panayiotis Gerolymos (KPMG Grecia) y Nicolas Reischer (becario ERASMUS Univ. de Alcalá-Vienna).**

1. FUENTES LEGISLATIVAS

Los procesos de quiebra en Grecia fueron inicialmente regulados por los artículos 437 al 614 del Código de Comercio, de fuerte inspiración napoleónica. Esta regulación fue reformada por la Ley de 1878 sobre la quiebra, que actualmente está en vigor después de haber sido objeto de profundas modificaciones, principalmente a

través de las leyes de 1910, 635/1937 y 1189/1938. El marco normativo vigente sobre la quiebra se encuentra situado en los arts. 525 a 707 del Código de Comercio, en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones como la reorganización o procesos especiales de insolvencia se regulan en las leyes 3562/1956, 1386/1983, 1892/1990, 1947/1991 y en el Decreto Presidencial 34/1985.

2. BIBLIOGRAFÍA

CAMPBELL, D. International Corporate Insolvency Law, Butterworths, 1992.

JAHN, U. Insolvenzen in Europa, Recht und Praxis, 3ª edición, Bonn, 1998.

KOZIRIS, A. Diritto fallimentare, Salonicco, 1985

LEVANTIS, E. Diritto fallimentare, Atene, 1975

ROKAS, C. Diritto fallimentare, Atene, 1978

3. MEDIDAS JURÍDICAS DE CARÁCTER PREVENTIVO.

3.1. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

El Gobierno griego dispone de una agencia especial encargada de reorganizar empresas que atraviesan dificultades económicas.

3.2. MEDIDAS JUDICIALES

La legislación griega concede al deudor comerciante, que se encuentra en una situación de crisis económica transitoria, la facultad de solicitar, ante el Juez competente, medidas cautelares patrimoniales colectivas con el fin de impedir que los intereses de los acreedores puedan verse perjudicados por los efectos de la insolvencia provisional. Son las llamadas medidas provisionales colectivas que, como tales, no constituyen, por sí solas, un proceso judicial autónomo e independiente.

Procedimiento: estas medidas se adoptan a través del proceso de jurisdicción voluntaria y, como corresponde a su naturaleza cautelar, tienen un carácter instrumental en relación al proceso principal cuyo futuro resultado pretenden garantizar.

Duración: por su carácter instrumental, tienen una duración temporal limitada que, en ocasiones, será suficiente para que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores sobre el pago de sus deudas y, de este modo, disminuya el riesgo de constituirse en el estado de insolvencia definitiva. Sin embargo, lo habitual será que estas medidas se soliciten de forma complementaria al ejercicio de una acción principal.

Legitimación: el deudor comerciante que conoce su situación de dificultad económica puede solicitarlas. Los acreedores no tienen reconocida esta facultad por el riesgo que la misma podría suponer sobre el adecuado desarrollo de la actividad mercantil de los comerciantes deudores.

Enumeración: destacan las siguientes medidas: a) prohibición sobre los terceros de ejercitar sus acciones ejecutivas individuales frente al deudor comerciante con el fin de evitar que los acreedores se sitúen en situación de desventaja patrimonial; b) prohibición sobre el deudor de disponer de activos propios y de constituir garantías reales sobre sus bienes; c) nombramiento de un administrador provisional.

Efectos: cumplen su función cautelar con eficacia *erga omnes*. Cesan sus efectos cautelares desde el momento en que el actor principal no interpone la acción en el plazo preclusivo que se le otorgó para esta finalidad.

4. PROCESO CONCURSAL DE DERECHO COMÚN PARA SITUACIONES DE CRISIS IRREVERSIBLES

4.1. LA QUIEBRA

4.1.1. Generalidades

El Derecho Concursal griego concibe la quiebra como el instrumento procesal adecuado para obtener la satisfacción de los acreedores en un mismo procedimiento y

de forma equitativa a través de la participación proporcional de todos ellos en las pérdidas sufridas por el deudor insolvente. Esta finalidad justifica que las normas procesales establecidas pretendan, como fin primario, la liquidación del patrimonio del quebrado y que prevean, desde el comienzo del proceso, el nombramiento de un administrador de la masa patrimonial.

En el proceso de quiebra se distinguen varias fases: a) *Fase preliminar*: comienza con la resolución judicial de quiebra y finaliza con el nombramiento del Síndico o Administrador de la masa de quiebra. b) *Fase definitiva*: se inicia con el nombramiento del Síndico y termina con el resultado del intento de concluir un compromiso entre el deudor y los acreedores. Si se alcanza el acuerdo de pago, el proceso de quiebra, en principio, finalizará; en caso contrario, se constituye la Unión de acreedores -que sustituye a la Junta de Acreedores- y se procede a la apertura de la última fase. c) *Fase final*: se abre ante el fracaso del compromiso y termina con la conclusión del reparto de la masa concursal y consiguiente liquidación de las deudas del comerciante quebrado.

El Derecho Concursal griego responde al principio de universalidad de la quiebra y en consecuencia prevé que todos los bienes del quebrado, incluidos los situados en el extranjero, queden afectados al proceso de quiebra. Con esta finalidad, el Derecho Internacional Privado griego regula, por un lado, la actuación del Síndico encaminada a obtener la efectiva afectación patrimonial, al proceso de quiebra iniciado en Grecia, de bienes situados en el territorio de la soberanía de otro país y, por otro, el procedimiento de *exequatur* en los supuestos en los que el Síndico extranjero pretenda la afectación de bienes situados en Grecia al proceso de quiebra declarado en otro país.

4.1.2. Presupuesto subjetivo

Legitimación pasiva: el proceso de quiebra está solamente abierto a personas, tanto físicas como jurídicas, que realizan operaciones mercantiles. No obstante, se

excluyen las Corporaciones de Derecho Administrativo y las Uniones jurídicas (por ejemplo, los Sindicatos).

Legitimación activa: están legitimados para solicitar la resolución judicial de quiebra : a) El deudor comerciante. b) Los acreedores. c) El Tribunal de oficio: procede la quiebra, en este caso, bien porque la solicitud del acreedor presenta algún defecto legal o bien, porque el Tribunal entiende que el proceso de quiebra debe continuar a pesar de que el crédito del acreedor instantáneo haya sido satisfecho y éste renuncie a su petición de quiebra. En la práctica la apertura de oficio es poco frecuente.

4.1.3. Presupuesto objetivo

La ley considera que la quiebra procede cuando el deudor comerciante es insolvente al incurrir en una cesación de pagos por incapacidad patrimonial.

Definición de insolvencia: es la imposibilidad permanente y general de un comerciante para pagar las deudas comerciales debidas, por carecer de dinero u otros activos por un período de tiempo indeterminado.

Requisitos: para que concurra la insolvencia es preciso que: a) los créditos de los acreedores procedan de obligaciones mercantiles; b) las deudas hayan vencido y sean, por tanto, exigibles; c) las obligaciones han de ser pecuniarias; d) basta con un sólo impago si la deuda es significativa por su cuantía; e) el carácter del cese debe ser general y duradero.

Indicios de la insolvencia: destacan, entre otros los siguientes: resistencia del deudor comerciante a celebrar un acuerdo amistoso con los acreedores de créditos vencidos; reclamaciones injustificadas del deudor comerciante al vendedor por presuntos vicios de los bienes adquiridos; falsificación de información o respuestas evasivas del deudor comerciante ante los requerimientos de pago de los acreedores; y, la imposibilidad de obtener una garantía personal de los socios o accionistas para solventar los problemas económicos de la empresa.

Información sobre la situación económica de los comerciantes: los Tribunales y los acreedores tienen a su disposición algunos medios jurídicos de publicidad, tanto

públicos como privados, que les permiten conocer indicios exteriores de una posible insolvencia como son: la lista mensual que elabora la Unión de Bancos de Grecia sobre protestos cambiarios; los libros elaborados por los Tribunales en los que constan el listado de solicitudes de quiebra y despachos de ejecución; el Registro Mercantil en el que se publican datos estatutarios relevantes de las sociedades; el Registro de la Propiedad donde se encuentran anotados todas las medidas de ejecución forzosa que afectan a los bienes inmuebles así como las hipotecas convencionales constituidas sobre los mismos; la publicación obligatoria, en los periódicos locales o en el diario del Tribunal (Atenas) de los apremios forzosos realizados a través de subasta judicial; y, por último, con carácter privado, la información bancaria o las agencias de informes.

4.1.4. Diligencias previas: apertura del proceso e impugnación

A) *Ámbito procesal*: el Tribunal realiza las diligencias previas del proceso de quiebra, a solicitud de parte legitimada (quiebra voluntaria o necesaria), que tienen por objeto el desarrollo de la actividad procesal encaminada a la valoración judicial de la concurrencia de los presupuestos legales condicionantes de la apertura del proceso de quiebra. Se tramitan a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria.

Actuación de oficio: si el proceso se abre a petición del Tribunal no hay procedimiento preliminar.

Quiebra voluntaria: el deudor comerciante que cesa en sus pagos está obligado a presentarse ante el Tribunal, dentro del plazo legal, para confesar su situación jurídica y solicitar la apertura del proceso de quiebra. Esta solicitud deberá ir acompañada de la entrega, para permanecer en depósito judicial, de los libros comerciales, el balance del negocio y un inventario de sus bienes. Cumplidos estos requisitos procesales, el Tribunal procederá, sin más acreditaciones, a la apertura del proceso de quiebra.

Quiebra necesaria: El acreedor de un comerciante que ha cesado en sus pagos comerciales está facultado para solicitar ante el Tribunal la declaración de quiebra de su deudor. El Tribunal, en la fase preliminar, deberá comprobar que los presupuestos legales quedan suficientemente acreditados y, en concreto: a) la condición comercial del

deudor y, b) la cesación en los pagos del deudor o la continuación de los mismos a través de medios dolosos o fraudulentos, por ejemplo, la venta de bienes a precios ruinosos, préstamos con intereses usurarios, defraudación de capital, solicitud fraudulenta de préstamo, etc.

El Tribunal sólo procederá a la apertura del proceso de quiebra si ambos elementos quedan acreditados por el solicitante. Por tanto, las solicitudes de acreedores que no vayan acompañadas de la oportuna propuesta de acreditación no serán admitidas a trámite -por lo que no se iniciarán las diligencias preliminares- y, de este modo, se evitan las solicitudes abusivas de los acreedores que sólo pretenden presentar su petición de quiebra como un medio de presión para obtener el cobro de su crédito.

B) Resolución judicial de quiebra. La ley establece un contenido obligatorio de la declaración de quiebra que es el siguiente: la tramitación de la quiebra, la designación de Juez Ponente, el nombramiento de administrador provisional que conserve el patrimonio del deudor afectado al proceso, la convocatoria de la Junta General de Acreedores para proceder a la elección de Síndico y la determinación del patrimonio concursal a través de la elaboración de un inventario. El Tribunal podrá, con carácter opcional, establecer el día a partir del cual el comerciante cesó en el pago de sus obligaciones mercantiles: si el Tribunal omite este pronunciamiento el día se delimita conforme al criterio legal.

C) Impugnación. Frente a la resolución judicial que estima o desestima la apertura del proceso de quiebra caben los recursos establecidos en el procedimiento de jurisdicción voluntaria. No obstante, la declaración de quiebra es ejecutable provisionalmente y una vez firme tiene efecto de cosa juzgada *erga omnes*. Tanto el quebrado como cualquier tercero con interés legítimo pueden oponerse, en plazo, a la declaración de quiebra dictada alegando que no intervinieron en las actuaciones procesales previas a la declaración de quiebra.

4.1.5. Órganos del proceso de quiebra

Órgano jurisdiccional

En Grecia, el proceso de quiebra se inicia ante un Tribunal compuesto por tres magistrados: entre ellos nombran al Juez Ponente. El órgano jurisdiccional es la figura más relevante en el proceso de quiebra.

Funciones: el Tribunal declara al comerciante en estado de quiebra: el Juez Ponente se encarga de supervisar las actuaciones de los órganos de la quiebra y prepara las resoluciones judiciales que el Tribunal adopta tras la oportuna votación; también preside la celebración de las Juntas Generales de los Acreedores, que previamente habrán sido convocadas a través del Secretario judicial; elabora el inventario de la masa patrimonial de la quiebra y resuelve las impugnaciones relativas al reconocimiento de créditos de los acreedores del quebrado.

Competencia territorial: le corresponde al Tribunal del distrito judicial donde el comerciante tenga situado el establecimiento mercantil.

Competencia internacional: los Tribunales griegos son competentes, según la ley, para pronunciar la quiebra de los comerciantes que tengan su establecimiento principal en Grecia. No obstante, la jurisprudencia ha extendido el ámbito de la competencia internacional al admitir la misma en los supuestos de compañías mercantiles establecidas en el extranjero pero cuyo centro de actividades y dirección esté ubicado en Grecia.

Administrador de la masa.

Función: es el responsable de la administración, liquidación y reparto de la masa patrimonial de la quiebra, con especial importancia en la finalización del proceso por convenio (compromiso).

Sujetos elegibles: abogados que cuenten con experiencia profesional no inferior a tres años en el momento del nombramiento.

Tipos de administradores: se distinguen tres tipos correspondientes, cada uno de ellos, a las distintas fases del proceso de quiebra. a) Administrador provisional: recibe el nombramiento en la resolución judicial de apertura del proceso. Su principal función consiste en evitar los riesgos y perjuicios que pudiera sufrir la masa patrimonial. b) Administrador definitivo o Síndico: nombrado por el Juez después de celebrada la Junta

General de Acreedores convocada para este propósito. En principio, la proposición de la Junta no vincula al Juez pero, en la práctica, el nombramiento suele responder a la decisión unánime de los acreedores. En esta fase del proceso, el Síndico continúa desempeñando la función de administrador de la masa y además delimita las deudas del quebrado. c) Administrador de la Unión de Acreedores o fase final: será nombrado en el caso de fracaso del convenio (compromiso) entre los acreedores y el quebrado.

La Junta de Acreedores

Funciones: propone al Juez la persona idónea como Síndico para sustituir al administrador provisional; decide en votación sobre la propuesta de compromiso para la satisfacción de los acreedores; si el compromiso fracasa, nombra al administrador de la Unión de Acreedores.

Miembros: participan en las votaciones de la Junta General los acreedores cuyos créditos hayan sido reconocidos.

Mayorías: la ley establece el porcentaje suficiente en los distintos supuestos regulados.

4.1.6. Efectos del proceso de quiebra sobre el deudor

A) A partir de la fecha de publicación de la decisión judicial de apertura del proceso de quiebra, el quebrado queda privado del derecho de disposición y administración del patrimonio perteneciente a la masa de la quiebra. El administrador de la quiebra asume el ejercicio de estos derechos en interés de los acreedores hasta el día en que se acuerde la rehabilitación del deudor. No obstante, el quebrado puede prestar colaboración al administrador en sus funciones concursales.

B) El órgano jurisdiccional procede al embargo del patrimonio que responde de las deudas del quebrado en el momento de la declaración de quiebra. Si el embargo afecta a bienes pertenecientes a terceros o al cónyuge no quebrado, éstos disponen de cauces de impugnación procesal para obtener el alzamiento del mismo. Además son

inembargables los bienes necesarios para el uso personal del quebrado y su familia y los derechos que no puedan ser transferidos, por razones sociales, como el usufructo sobre la vivienda o habitación, o el derecho de alimentos.

C) Tan pronto como se declare la quiebra, el administrador debe constituir una hipoteca sobre la propiedad de los bienes inmuebles del quebrado a favor de los acreedores.

D) Desde el momento en que el deudor incurre en la situación jurídico-económica de cesación en los pagos pesa sobre él la prohibición de realizar actos que tengan por objeto impedir o retrasar la apertura del proceso de quiebra o perjudicar a los acreedores.

E) Con la publicación de la quiebra el quebrado pierde la capacidad procesal sobre los litigios relativos a la masa de la quiebra y será representado en juicio por el Síndico tanto en los procesos interrumpidos a consecuencia de la apertura del proceso de quiebra como en los que se inicien con posterioridad. Sólo se le permite la solicitud de medidas provisionales.

F) El deudor está obligado a manifestar ante el Juez ponente las circunstancias por las que incurrió en la quiebra así como a declarar la existencia y exigibilidad de sus deudas. También deberá informar al Síndico del estado de sus negocios y del modo de formalización de sus libros comerciales.

G) El quebrado que se encuentre privado de libertad, a consecuencia de lo ilícitos cometidos con anterioridad a la declaración de quiebra, no será excarcelado.

H) El quebrado debe proponer un convenio de terminación del proceso de quiebra en el que ofrezca la satisfacción de un porcentaje mínimo de las reclamaciones efectuadas por los acreedores. Esta propuesta será discutida en la Junta General de Acreedores, en presencia del quebrado, y adoptada si se alcanzan las mayorías legales estipuladas.

4.1.7. Efectos del proceso de quiebra sobre los acreedores

A) Los acreedores no pueden ejercitar individualmente sus acciones declarativas ni ejecutivas; esta regla no afecta a los acreedores hipotecarios o prendarios siempre que

la ejecución forzosa que pretendan iniciar o continuar verse sobre los bienes, inmuebles o muebles, dados en garantía. Esta prohibición finaliza si la quiebra es revocada.

B) Vencimiento de los créditos contra el quebrado y su convertibilidad a metálico en la fecha de apertura del proceso de quiebra.

C) Cese del devengo de intereses de los créditos desde la declaración de quiebra, salvo los créditos asegurados con derechos prenda, hipoteca u otros privilegios establecidos por el legislador.

4.1.8. Efectos de la quiebra sobre los actos perjudiciales para los acreedores. El sistema revocatorio.

A) *Significado jurídico*: el sistema revocatorio posibilita una mayor satisfacción de los acreedores puesto que permite la reintegración a la masa activa de la quiebra de bienes del quebrado como consecuencia del ejercicio de las acciones de reclamación instadas por los Síndicos frente a los actos nulos o anulables realizados por aquél en el período sospechoso o los actos fraudulentos.

B) *Fecha de retroacción*: el órgano jurisdiccional fija, en la resolución de quiebra, la fecha de retroacción que coincide con el momento en que el deudor cesó en el pago de sus deudas y que no podrá exceder del plazo máximo permitido por el legislador.

C) *Período sospechoso*: los actos jurídicos realizados por el deudor entre la fecha de apertura del proceso de quiebra y la fecha de retroacción (período sospechoso) son susceptibles de nulidad o de impugnación en la medida en que sean subsumibles en los supuestos de hecho de las normas jurídicas que regulan esta materia.

C) *Régimen de eficacia jurídica de los actos realizados en el período sospechoso*:

a) Nulidad: los actos jurídicos realizados por el deudor a partir de la fecha de retroacción o en los diez días anteriores a la misma carecen de eficacia jurídica si disminuyen el patrimonio del deudor en detrimento de los acreedores. Al respecto, serán

nulos e inválidos, entre otros: 1. Los contratos por los que quede reducida la propiedad del deudor que ha cesado en sus pagos. 2. Cualquier transferencia gratuita de bienes del deudor. 3. La constitución de derechos reales de garantía realizadas sin contraprestación alguna. 4. Pago anticipado de deudas tanto parcial como total. 5. Pago de deudas vencidas si se ha efectuado de modo diverso a la entrega de dinero o emisión de orden de pago en moneda. 6. La constitución de derechos reales de garantía sobre bienes del quebrado para el aseguramiento de deudas contraídas con anterioridad al período sospechoso.

b) Impugnación: los sujetos legitimados pueden impugnar la eficacia jurídica de los actos realizados por el deudor durante el período sospechoso y el Juez la declarará si el actor prueba que el contratante del deudor conocía la situación de cesación de pagos en la que éste se encontraba y que el acto jurídico ha perjudicado a los acreedores. En concreto, podrán ser impugnados, por ejemplo: 1. La inscripción tardía de la hipoteca entendiendo por tal la que se ha intentado transcurridos quince días desde la fecha indicada en el título, a menos que por la distancia entre el lugar de inscripción y el de la formalización del título el legislador admita la ampliación proporcional del plazo señalado. 2. Pago de letras de cambio y pagarés: la acción debe ser dirigida contra el emisor de la letra de cambio o el primer endosante del pagaré y presupone, como en los demás supuestos, que en el momento del pago conoce la situación de insolvencia del deudor. 3. Pagos del comerciante a terceros y contratos bilaterales celebrados por el deudor siempre que se cumplan las condiciones señaladas con carácter general.

Legitimación: cualquier acreedor puede reclamar frente a un acto impugnado del deudor. Sin embargo, la legitimación para privar de eficacia a los actos realizados en fraude de acreedores le corresponde al Síndico.

4.1.9. Efectos penales de la apertura de la quiebra

La legislación concursal griega tiene por principal objetivo el de proteger las transacciones comerciales y relega la persecución penal a un segundo plano.

El Código penal tipifica conductas relacionadas con la insolvencia del quebrado (art.398).

Destaca en este ámbito penal, el reconocimiento de legitimación a la Unión de Acreedores, para perseguir la conducta delictiva del quebrado.

Además, el Derecho Internacional Privado griego concede al Síndico, bajo ciertas condiciones, legitimación para interponer acción penal ante los Tribunales griegos contra los directivos de una compañía en quiebra que tenga su domicilio en el extranjero.

4.1.10. Custodia y administración del patrimonio del deudor.

El Síndico es el responsable de la administración de los haberes de la quiebra y en cumplimiento de su función específica debe conservar los bienes y, en caso de que los mismos sean fungibles o exijan un gasto de conservación excesivo, procederá a su venta.

Todas las cantidades que el Síndico obtenga por las operaciones jurídicas realizadas en el patrimonio del quebrado (reclamaciones judiciales, requerimientos extrajudiciales, ventas de bienes, etc) deben ser depositadas, junto con los efectivos embargados al deudor, en la cuenta corriente abierta con este fin en una Entidad Crediticia.

La administración del Síndico incluye el pago de las deudas del quebrado que el Juez ponente autorice expresamente. También será necesario el consentimiento del Juez ponente para proceder a la venta de bienes muebles y ésta deberá ajustarse a las indicaciones establecidas por el Juez sobre la forma de pago.

4.1.11. Continuación de la empresa durante el proceso de quiebra

La legislación concursal griega prevé la posibilidad de continuación de la actividad empresarial durante el proceso de quiebra y en cualquiera de sus fases. Sin

embargo, la misma está condicionada al cumplimiento de requisitos previos como son:

- a) la elaboración judicial del inventario de la masa de quiebra y su valoración económica realizada por el Juez y el Síndico.
- b) el consentimiento del Juez ponente, cuyo otorgamiento o denegación dependerá del resultado que extraiga del examen de los beneficios y posibles riesgos económicos de la continuación.

La ley no regula expresamente la extensión de la competencia del Síndico en relación a la continuación de la actividad empresarial pero de la misma se desprende que deberá actuar en todo momento de conformidad con los intereses del patrimonio de la quiebra.

Disposiciones especiales: Por un lado, los bienes del quebrado que son necesarios para continuar con la actividad empresarial están exceptuados de la realización forzosa en el supuesto en que esta actividad continúe efectivamente; y, por otro, el pago de las deudas resultantes de la continuación de la actividad del quebrado no requieren consentimiento del Juez ponente.

4.1.12. Delimitación del pasivo y de los derechos de terceros sobre el patrimonio del deudor.

A) *Clases de acreedores:* el Derecho Concursal griego distingue tres categorías de acreedores: a) Acreedores que en el momento de declararse la quiebra son titulares de créditos pecuniarios frente al quebrado (acreedores de la quiebra). b) Acreedores que han contratado con el Síndico después de la declaración de quiebra y cuyos créditos son preferentes en relación a los anteriores (acreedores de la masa). c) Acreedores surgidos de la actividad desempeñada por el quebrado, tras la declaración de quiebra. Sus créditos se satisfacen con posterioridad a los dos grupos de acreedores mencionados.

B) *Presentación de solicitudes de reconocimiento de créditos.* Los acreedores que pretendan cobrar sus créditos en el proceso de quiebra deberán presentar la solicitud de reconocimiento de los mismos en el plazo de veinte días a contar desde la convocatoria publicada a este efecto en el periódico diario o notificada personalmente.

Este plazo se prorroga para los acreedores que residan fuera del ámbito de competencia territorial del Tribunal que conoce de la quiebra o en el extranjero.

La solicitud de reconocimiento se presenta por escrito ante el Tribunal, a través del Secretario judicial, y deberá ir acompañada de los documentos que justifiquen la exigibilidad del crédito y la cuantía del mismo, incluyendo los intereses devengados hasta la fecha de apertura del proceso de quiebra.

C) Procedimiento de reconocimiento de créditos: el Síndico procede al examen de las solicitudes presentadas y, en su caso, al reconocimiento del crédito en presencia del quebrado y de los restantes acreedores. Dentro del plazo de ocho días siguientes a este examen, cada acreedor es invitado a prestar declaración jurada sobre la veracidad y cuantía del crédito cuyo pago reclama; sin embargo, los acreedores extranjeros pueden quedar exonerados de esta declaración por el Juez ponente, previo informe del Síndico.

Los acreedores cuyos créditos no sean reconocidos podrán dirigirse al Juez impugnando la decisión del Síndico. También están legitimados para reclamar un pronunciamiento judicial sobre el reconocimiento del crédito -además del acreedor perjudicado-, el quebrado, el Síndico y cualquier otro acreedor.

Podrán participar en la Junta General los acreedores que hayan obtenido el reconocimiento de sus créditos: sin embargo, los acreedores cuyos créditos están asegurados participan en las Juntas Generales sólo en la porción insatisfecha de sus créditos.

C) Los derechos de los terceros: se presume que los bienes adquiridos por el cónyuge del quebrado durante los dos años anteriores a la cesación de pagos pertenecen a la masa de la quiebra, excepto si aquél prueba que los mismos no formaban parte del patrimonio del cónyuge quebrado ni han sido adquiridos con cargo a los bienes de éste. Esta presunción no se aplica cuando ambos cónyuges, por disposición del régimen patrimonial matrimonial pactado, colaboran al sostenimiento de las cargas familiares.

Un supuesto especial que establece la legislación griega de quiebra es el relativo a la venta con reserva de dominio: al respecto, si el vendedor se reserva la propiedad del bien hasta que el comprador cumpla su obligación de pago, y éste es declarado en quiebra, podrá solicitar la restitución si se cumplen dos condiciones; a) que el proceso de quiebra se inicie antes del cumplimiento completo del pago; b) que antes de la

apertura de la quiebra, el vendedor hubiera resuelto el contrato de compraventa o el comprador hubiera incurrido en mora. Si no concurren ambos requisitos, la garantía del vendedor no podrá hacerse efectiva en el proceso de quiebra por lo que pasará a formar parte del grupo de acreedores de la quiebra.

Por otro lado, el legislador permite al propietario de los bienes enviados al intermediario-quebrado para su venta que, en ciertas condiciones pueda reivindicarlos.

4.1.13. Terminación del proceso de quiebra

A) *Por falta de activo*: si el patrimonio no es suficiente para cubrir los gastos del procedimiento, el Juez ponente puede decretar de oficio la clausura del proceso, previa audiencia del Administrador concursal. Terminado el proceso, los acreedores quedarán libres para ejercitar individualmente sus acciones declarativas o ejecutivas.

Frente a la resolución judicial de finalización del proceso por falta de activo, tanto el deudor quebrado como cualquier tercero interesado pueden interponer recurso solicitando su revocación, que será estimada si resulta probada la existencia de bienes suficientes para continuar el proceso, o bien, si aquellos adelantan al Administrador la cantidad necesaria para cubrir los gastos del proceso.

B) *Desistimiento del acreedor solicitante*: desde que el acreedor presenta su solicitud hasta el momento de publicación de la apertura de la quiebra, el acreedor puede retirar su petición. Este desistimiento suele ser consecuencia del pago del crédito por el deudor al acreedor solicitante: en cualquier caso, el Juez deberá pronunciarse sobre su aceptación.

C) *Acuerdo revocatorio de los acreedores*: los acreedores pueden solicitar la revocación de la decisión de apertura de la quiebra en cualquier fase del proceso, incluso con posterioridad a la publicación de la declaración de quiebra. Se requiere el consentimiento unánime de todos los acreedores en la solicitud de revocación. Si el Juez estima la solicitud de revocación, la declaración de quiebra quedará sin efecto.

D) *Convenio satisfactivo entre acreedores y deudor*: por la importancia de este modo de terminación le dedicamos, a continuación, un epígrafe independiente.

4.1.14. Terminación del juicio por convenio con los acreedores

Un aspecto específico del Derecho Concursal griego es la regulación, como modo ordinario de terminación del proceso de quiebra, de un acuerdo entre los acreedores y el quebrado que evita la liquidación del activo. A través del denominado "compromiso" el quebrado y la Junta General de Acreedores deciden la satisfacción parcial de los créditos partiendo de la propuesta ofrecida por el deudor quebrado de pago parcial de la suma reclamada.

Concepto: acuerdo alcanzado entre los acreedores y el quebrado por el cual se reduce parte de la deuda debida y se fija el modo y momento del pago de los créditos en la cuantía que no son remitidos.

Confirmación judicial: el Tribunal se pronunciará sobre la vinculación jurídica del compromiso entre el deudor y los acreedores, rechazándola si no concurren las mayorías legales establecidas al respecto.

Sujetos legitimados: tendrán derecho a intervenir en la votación del compromiso los acreedores cuyos créditos hayan sido reconocidos en el proceso de quiebra.

Efectos: a) Reduce la cuantía de las deudas en concepto de principal e intereses. b) Los acreedores adquieren, a través de terceros, garantías reales o personales de la solvencia del deudor. c) Vincula a todos los acreedores que, con anterioridad a la apertura de la quiebra, no sean titulares de derechos de garantía, incluso a los que discreparon de su contenido. No obstante, los acreedores titulares de derechos de garantía, en la fecha de la decisión de quiebra, perderán su derecho de ejecución separada si votan incondicionalmente en favor del compromiso. d) Finalización del proceso de quiebra con el cumplimiento del compromiso.

Impugnación: en el plazo de ocho días siguientes a su adopción, el compromiso podrá ser recurrido por la concurrencia de alguna de las causas reguladas en la ley.

Rescisión: a) en caso de incumplimiento por el deudor de las obligaciones contraídas en el compromiso. b) si la quiebra es declarada fraudulenta.

Fracaso del compromiso: da lugar a la apertura de la fase final o liquidación.

4.1.15. Liquidación del activo

La masa activa de la quiebra se liquida una vez que ha fracasado el intento de acuerdo entre deudor y acreedores a través del compromiso. Este fracaso transforma la Junta de Acreedores en la Unión de acreedores compuesta por todos los acreedores de la quiebra. Este nuevo órgano nombrará un Administrador de la quiebra, que será quien liquide la masa -a través principalmente de la subasta- y satisfaga proporcionalmente los créditos de los acreedores, excepto los créditos asegurados con derechos de garantía.

No obstante, la actividad del quebrado puede continuar si así lo deciden por mayoría los acreedores. Esta continuación implica, en ocasiones, la decisión del Tribunal de permitir la concesión de un crédito al quebrado, si el Síndico lo hubiera propuesto y previa audiencia de la Junta de Acreedores.

4.1.16. Reparto del activo liquidado

Los acreedores cuyos créditos están asegurados por garantías reales son satisfechos con prioridad sobre los acreedores cuyos créditos no están asegurados. Sin embargo, tienen preferencia sobre los acreedores asegurados los acreedores titulares de los siguientes derechos de crédito: los gastos del Tribunal y del Administrador concursal; la ayuda concedida al quebrado y su familia; los salarios debidos a los trabajadores y las contribuciones públicas como tasas, impuestos o pagos a la Seguridad Social.

Por otro lado, los acreedores cuyos créditos están sujetos a condición participan en las distintas fases del proceso de quiebra pero no en la relativa a la liquidación mientras que la condición no se haya cumplido: entre tanto, sus correspondientes dividendos quedan retenidos.

4.1.17. Rehabilitación del deudor

Legitimación: podrá solicitar la rehabilitación tanto el quebrado como sus herederos.

Procedimiento: se tramita a través de los trámites de la jurisdicción voluntaria.

Impugnación: la ley establece causas y plazo para interponer recurso frente a la rehabilitación.

Revocación: procederá en caso de condena penal del quebrado por quiebra fraudulenta.

Clases: a) total: se caracteriza porque pone fin a todas las consecuencias de la resolución de quiebra y se obtiene una vez que todos los acreedores han sido satisfechos del pago de sus créditos tanto en relación al principal como a los intereses, o bien una vez que el compromiso alcanzado por el quebrado y los acreedores ha sido cumplido. b) parcial: la disposición y administración del quebrado sobre los bienes afectados al proceso de quiebra continúa limitada.

5. EL PROCESO CONCURSAL PARA SITUACIONES DE CRISIS REVERSIBLES: LA ADMINISTRACIÓN FORZOSA PROVISIONAL.

El comerciante que se encuentre en situación de incapacidad parcial del pago de sus deudas vencidas puede solicitar la administración forzosa y provisional de su patrimonio.

El Tribunal nombra un Administrador a petición del deudor comerciante, de un acreedor o de un tercero que asumirá las facultades de administración sobre el patrimonio del comerciante.

Terminación: a) en caso de apertura de procesos de ejecución sobre los bienes del comerciante objeto de la administración y, b) si el comerciante es declarado en quiebra.

6. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA SUPUESTOS CONCRETOS.

6.1. Entidades públicas

La administración forzosa provisional puede ser solicitada por cualquier tipo de comerciante. Sin embargo, las empresas públicas son objeto de regulación específica en determinados aspectos de este procedimiento alternativo a la quiebra.

6.2. Sociedades por acciones

El Derecho Concursal griego establece disposiciones especiales para el supuesto de sociedad por acciones que ha cesado en sus pagos. En este caso, instada la apertura del proceso de quiebra ante el Tribunal competente, éste podrá decretar que la sociedad se mantenga bajo la administración de la Junta de Acreedores o que sea sometida a una liquidación especial.

A) La Administración de la Junta de Acreedores.

En la fase inicial es nombrado un administrador provisional -a propuesta del Comité especial constituido por el Gobernador del Banco de Grecia- que desempeña su función hasta que la Junta de Acreedores adopte un acuerdo sobre el administrador definitivo.

Durante el período de administración, los acreedores no podrán ejercitar sus acciones ejecutivas y las solicitudes de quiebra no serán cursadas.

La gestión realizada por el Administrador es sometida a la aprobación de la Junta General de accionistas que podrá rechazarla, en cuyo caso se decidirá si la sociedad debe ser objeto de liquidación especial, o podrá adoptar su continuación: en este caso todas las funciones de la Junta General de los accionistas son asumidas por la Junta de Acreedores que, a su vez, nombrará un comité encargado de las tareas de gestión. Los acreedores participan en el reparto anual de dividendos y, una vez que todos los créditos estén satisfechos, la gestión de la empresa es asumida, de nuevo, por los accionistas.

B) La liquidación especial.

El Tribunal, de oficio, puede iniciar el proceso especial de liquidación de la sociedad a través de la subasta de todos los bienes encomendada al Administrador.

La decisión de la Junta de Acreedores sobre la disolución o la liquidación especial de la sociedad está condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos: a) consentimiento del Comité especial; b) que la sociedad haya permanecido bajo la administración de la Junta de Acreedores durante un período de tiempo no inferior a cinco años ni superior a doce.